

tico de Zimatlan de 30 de Octubre del año anterior, previene: que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes del 30 de Octubre citado, de la que resulta que no se han atacado con tal disposicion los derechos de Pedrueca; que si algunos tienen que alegar respecto de la validéz del convenio que se dice celebrado entre él y los vecinos del pueblo de Santa Inés, el referido 30 de Octubre del año próximo pasado, de cuyo convenio emanó la providencia del Gefe político, esos derechos deben ventilarse en el juicio respectivo y no son materia de amparo.

Considerando, por último: que en las facultades del Gobernador está revocar ó no las providencias del Gefe político, sin que esto importe juzgar por leyes privativas ni por Tribunal especial, contra lo que dispone el artículo 18 de la Constitucion general, ni tampoco infringir el 16 ni el 27 de la misma.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo que dispone el artículo 101, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada en este juicio á 13 de Agosto próximo pasado, por el Juez de Distrito de Oaxaca, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Joaquin de la Maza Pedrueca, contra el acuerdo del Gobierno del Estado de 26 de Marzo último, que revocó la providencia del Gefe político de Zimatlan de 30 de Octubre del año próximo pasado, por haber violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 18 y 16 del Código fundamental de la República.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guz-*

man.—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre de 1874.—*Enrique Landa*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de México por el C. Guillermo Prieto, como defensor del reo Agustín Rosales, sentenciado á la pena de muerte por el homicidio perpetrado en la persona del C. Lic. Manuel Bolado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Guillermo Prieto como defensor de Agustín Rosales, quejándose de que habiendo sido sentenciado su defendido á la pena de muerte por el delito de homicidio en la persona del C. Lic. Manuel Bolado, ocurrió por equivocacion al C. Presidente de la República, impetrando la gracia de indulto que le fué denegada; que como no pudo otorgársele por el C. Presidente de la República por carecer de facultades, pues el artículo 85 de la Constitucion, fraccion 15, solo se la concede, tratándose de reos sentenciados por los Tribunales federales, los que incontestablemente no juzgaron á su defendido, pedía al Juzgado mandara suspender la ejecucion de la sentencia, hasta que el Poder Legislativo declarara cual era la autoridad competente para conceder ó negar el indulto. Por un otro sí agregó, que se referia al artículo 14 de la Constitucion federal, en cuanto que dispone, que ninguno sea sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al caso y por autoridad competente.

Sustanciado el punto de la suspension en la forma debida, el Juzgado la decretó, mandando que el C. Juez de lo criminal rindie-

ra el informe con justificación que previene la ley, y lo evacuó, acompañando copia certificada de las principales diligencias que obran en la causa de Rosales, y son, la consignación que el C. Inspector de policía le hizo de los reos Agustín Rosales y Ramon Hernandez, por el asesinato que habian cometido en la persona del C. Lic. Manuel Bolado, el auto en que mandó se procediera á practicar la averiguación correspondiente; la certificación de identificación de la persona del occiso; las preguntas resueltas por el Jurado, declarando la culpabilidad de los acusados; la sentencia que pronunció el 30 de Mayo del corriente año que condenó á Rosales á la pena de muerte, y á Hernandez á la de trece años cuatro meses de prisión, con el carácter de retención por una cuarta parte mas de este tiempo, la de revisión pronunciada por la 2ª Sala del Tribunal Superior en 20 de Junio último, con audiencia del C. Fiscal 1º, que confirmó la del inferior en cuanto á Rosales, revocando la relativa á Hernandez, que redujo á diez años contados desde el 30 de Mayo fecha de la sentencia de 1ª instancia, y un oficio del C. Ministro de Justicia, fecha 22 de Julio, en que le participa que el C. Presidente de la República, despues de haber examinado atentamente todas las constancias de la causa habia declarado que no habia mérito para conceder el indulto á Rosales. En el informe con que acompañó el C. Juez 1º las anteriores constancias, sostiene que no ha habido violación de la garantía reclamada, porque el reo fué juzgado por Tribunales competentes y por leyes anteriores al hecho juzgado, supuesto que la pena se le impuso conforme al veredicto que pronunció el Jurado, quien conoció del delito conformándose á la ley de jurados de 15 de Junio de 1869, habiéndose instruido el proceso con arreglo á esta ley y á la de 5 de Enero de 1857, observándose las prescripciones del Código Penal, sancionado y publicado el 7 de Diciembre de 1871, y vigente en el Distrito federal desde el día 1º de

Abril de 1872; que en cuanto á los Tribunales que sentenciaron, son los creados por la ley de 23 de Noviembre de 1855, revalida en cuanto al Tribunal Superior por la de Febrero de 1860, y á cuyas autoridades se refieren los artículos 1º y 52 de la ley de 15 de Junio de 1869. Recibido el juicio á prueba por el término de la ley, dentro de él, el C. Guillermo Prieto rindió la que al derecho de su defendido convenia, y pidió 1º: que se librara oficio al Juez 1º de lo criminal, para que remitiera copia certificada de la causa y demas actuaciones relativas á Rosales, con ocasion del homicidio del C. Lic. Manuel Bolado. 2º: Que se librara oficio á las Salas 1ª y 2ª del Tribunal Superior, para que remitieran copias de los Tocas formados con ocasion del mismo proceso, y 3º: que se admitiera original la comunicacion que adjuntaba, y le fué dirigida por el C. Ministro de Justicia, avisándole que el C. Presidente de la República habia negado el indulto á Rosales. Por un otro sí, el C. Lic. Manuel G. Prieto dijo: que por su parte le era indiferente se pidieran originales las constancias á que se referia. El Juzgado proveyó de conformidad al escrito, dejando al arbitrio del C. Juez 1º de lo criminal remitir original la causa ó en copia certificada. A virtud del anterior auto se recibió del Juzgado 1º de lo criminal la causa original, y del Tribunal Superior, copias certificadas de los Tocas respectivos y contienen: una, las diligencias practicadas en la 2ª Sala para la revisión de la causa; y otra, las que tuvieron lugar en la 1ª Sala al interponerse el recurso de denegada nulidad.

Las vaguedades con que se interpuso el recurso de amparo por parte del C. Guillermo Prieto, pues en el cuerpo del escrito de queja se concreta á pedir la suspensión de la ejecución de Rosales por falta de autoridad á quien pedir el indulto, y mientras el Congreso dá una ley declarando la autoridad competente, y solo por un otro sí se dice, que la garantía violada es la otorgada por el artículo 14 de la Constitución, pero

sin determinarse ni explicarse en qué consiste la violación, hace que realmente en el presente juicio de amparo no pueda con precisión fijarse el punto materia del amparo.

Tomando la cuestión en general, tenemos, que existe un reo que ha sido juzgado por un delito del orden común, con arreglo á la legislación penal, esto es, por Jurados creados por la ley de 15 de Junio de 1869, sentenciada la causa por el Juzgado 1º de lo criminal que instruyó el proceso, revisada por el Tribunal Superior con arreglo á la misma ley, y fallada por jueces competentes, pues lo son los que desempeñan los Juzgados y Tribunales establecidos por la ley de 23 de Noviembre de 1855 y por la de 3 de Marzo de 1868. Ahora bien, ignorándose sobre que versa el amparo, ni la referencia del artículo constitucional citado, pues en el indulto no hay ni juicio ni sentencia, ni de la causa se ha reclamado ningún acto; en general está demostrado, que se trata de leyes anteriores al delito y aplicables al caso, de manera que en abstracto no existe razón alguna para que pueda decirse se ha violado la garantía reclamada. Repito, que el escrito de queja no se ha formulado con arreglo á la ley, y que solo el amparo puede considerarse bajo principios generales, que si perjudican al quejoso, es el camino trazado por su defensor, y el que tiene que seguir el Juzgado conforme á la ley.

El punto del indulto es mas vago que el anterior, pues como está el pedido en el escrito de queja, quizá no debió dirigirse á un Juzgado de Distrito, pues este solo conoce por vía de amparo, y no se ha designado la garantía violada, ni en la Constitución aparece que los reos disfruten esa gracia como garantía individual, ni podría ser, pues solo se garantizan los derechos del hombre.

Podría entrar al exámen de si al C. Presidente de la República corresponde conocer del recurso de indulto cuando se trata de

reos sentenciados por los Tribunales del fuero común del Distrito federal; mas esto es extraño al presente juicio de amparo, en el que únicamente debe examinarse lo que tenga relación con la violación de garantías individuales, y ninguna hay que se refiera á la gracia de indulto.

Que el Juzgado revisara la causa y conociera como Tribunal de 3ª instancia, ni ha sido solicitado por el quejoso, ni lo permite la Constitución; además, no se ha designado el acto reclamado; y admitiendo cupiera en las atribuciones del Juzgado nada ha pedido el quejoso.

El que suscribe no ha visto el alegato del quejoso, si acaso subsanará las faltas anotadas, el Juzgado tomándolo en consideración resolverá lo que fuere de justicia.

México, Agosto 25 de 1874.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno,* secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Agosto 31 de 1874.—Visto el presente recurso de amparo promovido por el C. Guillermo Prieto como defensor del reo Agustín Rosales, sentenciado á la pena de muerte por el homicidio perpetrado en la persona del C. Lic. Manuel Bolado, que se funda en que, en la sustanciación de la causa instruida contra el reo, y en la sentencia se ha violado la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitución federal, y que además procede el recurso de amparo por la denegación del indulto, conforme al ejercicio de la autoridad que lo ha denegado, pues esa facultad solo la tiene el Presidente de la República, respecto de los reos sentenciados por delito de la competencia de los Tribunales federales, que en el caso no han juzgado á Rosales. Visto el auto de suspensión de 30 de Julio último; las pruebas rendidas por el defensor; lo pedido por el C. Promotor fiscal; el alegato del defen-

sor en el cual se propone demostrar, que se han infringido tambien los artículos 16, 20, 23 y 24 de la Constitucion, y los artículos 58 y 59 de la ley de Jurados y su reglamento, como conexos con el artículo 14 de la misma Constitucion: Que por lo mismo hay que examinar y decidir las cuestiones siguientes: Primera: ¿Se ha violado en la sustanciacion de la causa y en las sentencias contra Rosales, las garantías que otorgan al hombre los artículos alegados? ¿Procede el recurso de amparo por la denegacion del indulto y por el ejercicio del poder que le ha denegado?

Considerando respecto á la primera cuestion, que en la causa que se tiene á la vista aparece (fojas 1ª), que consignado el rco á disposicion del C. Juez 1º de lo criminal en 23 de Febrero del presente año, se le ha tomado su declaracion preparatoria, (fojas 4 vuelta), y de las diligencias practicadas, resulta fundada y motivada la causa legal del procedimiento.

Que en virtud del auto de formal prision, nombró defensores á los CC. Luis G. de la Sierra, Manuel y Guillermo Prieto, á quien se oyó en defensa en el acto de la vista ante el Jurado (fojas 19, 61, 100 y 115), se practicaron previamente los careos de los testigos con el acusado (fojas 9, 17, 20, 29, 33, 76 vuelta, 86, 89, 93 y 96 vuelta) en la sustanciacion del proceso, con lo cual se llenaron las garantías que previenen los artículos 14 y el 20 de la Constitucion.

Que pronunciado el veredicto por el Jurado (fojas 125), este declaró por mayoría de votos, que Agustin Rosales era culpable del delito de homicidio perpetrado en la persona del C. Lic. Manuel Bolado, y que este homicidio se ejecutó con premeditacion fuera de riña, con ventaja y con alevosía, por lo que para ver si han sido ó no violadas las garantías que otorgan los artículos 23 y 14 de la Constitucion, debe examinarse: primero: si han sido aplicados exactamente al caso los artículos 515, 518, 543, 561 fraccion 1ª y 3ª, y 566 del Código pe-

nal. Segundo: Si este Código es anterior al hecho cometido por Rosales. Tercero: Si han sido aplicados por Tribunales establecidos previamente al hecho juzgado. Cuarto: Si la pena impuesta por el artículo 561 está permitida por la Constitucion; y apreciando, que los artículos referidos son exactamente aplicables á las resoluciones del Jurado, pues su contesto es conforme con lo que expresa el veredicto del mismo Jurado.

Que el Código penal está publicado y mandado observar desde el 1º de Abril de 1872, y el delito por el que se ha juzgado á Rosales fué cometido el 23 de Febrero del corriente año; que los Tribunales que lo han juzgado y aplicado las leyes, son los establecidos por la ley de 23 de Noviembre de 1855 y 3 de Mayo de 1868, de cuyo cómputo de fechas se hace evidente la anterioridad, tanto de las leyes aplicadas, como de los Tribunales que lo han hecho.

Que no estando aun cumplida la parte 1ª del artículo 23 del Código fundamental, esto es, el establecimiento de régimen penitenciario por el poder administrativo, queda esa pena abolida solo para los delitos políticos, y subsistente para los demás que en la segunda parte de dicho artículo se expresan, y entre los cuales está comprendido el homicidio con premeditacion, alevosía ó ventaja cometido por Rosales, por lo que en la causa que se le ha instruido se ha acatado fielmente el precepto constitucional, aplicándole la pena que el mismo Código fundamental ha dejado establecida hasta hoy y con el que concuerda el artículo 561 del Código Penal.

Que siendo conexo con el artículo 20 de la Constitucion de 58 de la ley de 19 de Junio de 1869, y no en el 59 como pretende el defensor, pues que este solo se refiere y los casos de responsabilidad y no de nulidad del procedimiento, no estando infringido el artículo constitucional, como queda demostrado, tampoco lo está su correlativo el 58 de la ley de Jurados.

Que el artículo 54 de la ley antes citada,

es conforme al texto constitucional del artículo 24, pues este prohíbe, y no establece que en los juicios criminales haya más de tres instancias, por lo que no es lógico ni se infiere que dicho artículo 51 de la ley, viole la garantía contenida en el constitucional como lo asienta el defensor, y que no habiendo propuesto ni de oficio ni á moción de los defensores del reo la nulidad, la 2ª Sala del Tribunal Superior, como único competente para calificarla y promoverla; respecto del veredicto del Jurado, no hay competencia en el Juzgado de Distrito para revisar la contradicción en él alegada.

Considerando respecto á la segunda cuestión, que el artículo constitucional en que debe fundarse la procedencia del recurso de amparo, es el 101 y no el 97 en su fracción 1ª, como el defensor pretende, pues este artículo establece la competencia de los Tribunales de la federación, para conocer de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, y aquel especifica en sus fracciones 1ª, 2ª y 3ª cuales son esas y cuales de los Tribunales federales es el competente conforme á la ley orgánica prevenida en el artículo 102 constitucional.

Que establecida esta diferencia, y atendiendo al texto constitucional del artículo 101, para que proceda el recurso de amparo por la denegación del indulto y por el ejercicio del poder que lo ha denegado, es necesario que haya ley ó acto de autoridad que viole y garantía individual violada.

Que al ejercitar ese poder de gracia el Presidente de la República respecto de los reos sentenciados por delitos de la competencia de los Tribunales del Distrito federal, no puede cometer violación, por que esto no se concibe sin que haya ley que lo prohíba hacer uso de esa facultad ó que esta le esté cometida á otro de los poderes federales, que son ó la Suprema Corte de Justicia ó el poder legislativo.

Que no teniendo estos poderes entre sus facultades la de conceder indulto, y supues-

ta la organización del Distrito federal y de sus Tribunales, debe considerarse que el Presidente de la República obra al ejercerlo en la órbita de sus facultades, por lo que no puede el ejercicio de ese poder importar violación.

Que esto se corrobora teniendo presente, que en el artículo 240 del Código Penal, aprobado por el Congreso para ser obedecido en el Distrito por lo relativo á los delitos del fuero común, se contiene y expresa como debe proceder el poder ejecutivo en la comutación de las penas, y la cual tiene solo lugar en los casos de indulto y de sentencia irrevocable, según los artículos del 284 al 287 del Código penal, por lo que es claro que ni hay violación en el ejercicio del indulto por el poder ejecutivo, y que no puede dudarse con fundamento alguno que él tiene esa prerrogativa en el Distrito federal, respecto de los reos sentenciados por delitos de las competencias de estos Tribunales.

Finalmente, que no siendo una garantía individual ni un derecho perfecto la facultad de obtener indulto, porque no está expresado ese derecho en ningún artículo constitucional de los comprendidos en la sección primera del Código fundamental, y siendo el arbitrio del poder de quien se solicita esa gracia, obtenerla ó no al peticionario, no hay ni puede haber en la denegación del indulto garantía individual violada.

Con fundamento de lo expuesto y de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se declara: Primero: que ni en la sustanciación de la causa, ni en las sentencias de primera y segunda instancia se han violado en la persona de Agustín Rosales las garantías individuales que la Constitución otorga en los artículos 14, 16, 20, 23, 24, ni en el 58 de la ley de 15 de Junio de 1869. Segundo: que no procede el recurso de amparo por la denegación del indulto; en consecuencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege á Agustín Rosales, contra la ejecución de la sentencia

ejecutoriada de 30 de Mayo de 1864, que le impuso la pena capital, ni contra el acto en virtud del cual el C. Presidente de la República le denegó la gracia de indulto, y se revoca el auto de 30 de Julio último en la parte que previene la suspension de la ejecucion de la sentencia. Publíquese en el Diario Oficial y Semanario Judicial. Hágase saber, y remítanse estas actuaciones para su revision á la Suprema Corte de Justicia.—Así definitivamente juzgando lo proveyó y firmó el C. Juez 1º interino de Distrito, Lic. José María Landa.—Doy fé. —José María Landa.—F. de A. Osorno, secretario.

Es copia que certifico.—F. de A. Osorno secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 14 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta Capital por el C. Guillermo Prieto, como defensor del reo Agustin Rosales, contra las resoluciones del Jurado y Tribunales del Distrito federal que conocieron de la causa que se instruyó á su defensa, por homicidio perpetrado en la persona del Lic. Manuel Bolado y por las cuales fué declarado culpable de haber cometido ese delito con las circunstancias agravantes de alevosía, premeditacion y ventaja, y condenado á sufrir la pena de muerte, desechándose de plano el recurso de nulidad á que había lugar, por la contradiccion de las respuestas del Jurado, resoluciones que en concepto del quejoso violan las garantías consignadas en los arts. 14, 16, 20, 23 y 24 de la Constitucion de la República, cuyo art. 85 frac. 15 ha sido igualmente infringida, por la resolucion del C. Presidente de la República, negando el indulto á Rosales, en virtud de que dicha autoridad no tiene facultad, conforme á la fraccion 15ª del art. citado, para conceder

TOMO VI.—PARTE II.

ó negar el indulto á otros reos que á los sentenciados por los Tribunales federales, Visto el informe de la autoridad; el parecer fiscal; el fallo del Juez de Distrito, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que á consecuencia de la contradiccion que existe en las respuestas del Jurado á las preguntas que se le hicieron sobre las circunstancias agravantes del homicidio perpetrado por Rosales, no quedó claramente determinado por el veredicto que el delito hubiera sido cometido con alevosía, premeditacion y ventaja.

Que por lo mismo, no ha sido aplicado con exactitud al hecho de que ha sido declarado culpable Agustin Rosales, el art. 23 constitucional, en la parte que permite imponer la pena de muerte al homicida, con las circunstancias agravantes de alevosía, premeditacion y ventaja.

Que conforme al art. 14 de la Constitucion, nadie pueda ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicables al hecho: garantía individual que ha sido vulnerada en perjuicio de Rosales.

Por lo expuesto y con fundamento de los arts. 14, 23, 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta:

1º: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez 1º de Distrito de esta Capital, en 31 de Agosto del presente año, que declaró no proceder el amparo de la Justicia federal en el presente caso.

2º: La Justicia de la Union ampara y protege á Agustin Rosales, contra las sentencias de 1ª y 2ª instancia, por las cuales fué condenado á sufrir la pena de muerte, como culpable de haber cometido el delito de homicidio en la persona del Lic. Manuel Bolado, con las circunstancias agravantes de alevosía, premeditacion y ventaja.

Devuélvanso las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoria de votos

los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México Setiembre 28 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por los Señores Antonio Goycoelea y Ca y otros comerciantes, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas de ese Estado del veinticinco por ciento federal sobre los nueve mil pesos en que contrataron con el Gobierno del Estado, el consumo de la ciudad de Alamos, por un año.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Fiscal cree infundado el amparo, que solicitan algunos comerciantes de la ciudad de Alamos, por el 25 por ciento adicional que se les exige por el Administrador de rentas de aquella misma ciudad, sobre la cantidad de nueve mil pesos que el C. Gobernador del Estado arregló con aquellos comerciantes, según que para ello estaba facultado, y como derecho de consumo, por el término de un año, resistiéndose ahora al pago de ciento ochenta y siete pesos cincuenta centavos mensuales que pertenecen á la federación por la ley general de 16 de Diciembre de 1861. Es tan terminante esta ley en su artículo 1º, que no deja duda que debe pagarse esta cuarta parte de todo

impuesto ó contribución que imponga cualquiera oficina de los Estados y la que debe recargarse á los causantes. De ninguna manera han justificado los quejosos que en ese arreglo que se hizo con el Gobernador del Estado estaba incluido el 25 por ciento federal, del que los Estados de ninguna manera pueden disponer; en consecuencia, los procedimientos de aquel empleado al exigir á los peticionarios el cobro de ciento ochenta y siete pesos cincuenta centavos mensuales que corresponden como cuarta parte de los setecientos cincuenta que se comprometieron á entregar al Estado, son arreglados á la ley ya citada de 16 de Diciembre de 1861; y por lo mismo, al obrar así el C. Administrador, lo hace en la órbita de sus atribuciones, sin que por esto viole las garantías que invocan los quejosos, por lo que pido se decreta, que no hay lugar al amparo que se solicita.

Guaymas, Julio 2 de 1874.—*Jose Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Julio 28 de 1874.—*Lic. Monteverde.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Julio 28 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por los comerciantes de Alamos, Señores. Antonio Goycoelea y Ca, Tomás Robinson Bouis, Quirine Corbalá, Parada y Quiroz, Esteban Ortiz, Modesto Güereña, Rafael Almada, Salido Hermanos, Rafael Acuña, Francisco R. Medrano, Bojorquez y Zazucta, Brígido Gil y José Mª Espinosa de los Monteros, contra el cobro que les hace el C. Administrador de rentas, del veinticinco por ciento federal, sobre nueve mil pesos en que contrataron por un año con el Gobierno del Estado, el consumo de la ciudad de Alamos por los efectos nacionales y nacionalizados: Vistos los fundamentos en que se apoyan en su escrito de 25 de Mayo pasado; visto el pedido del Promotor fiscal de este Juz-